

Valiente ante la hipocresía

ANDRES AYLWIN AZOCAR

Patricio Aylwin ha terminado su período presidencial en medio del respeto y cariño de su pueblo. Como hermano suyo he sido testigo de esa impresionante admiración hacia un hombre que afrontó tiempos de crueldad e incertidumbre hasta convertirlos en tiempos de paz y esperanza.

Uno de sus últimos actos ha sido solucionar integralmente el problema de los presos políticos de la dictadura. Era difícil hacerlo en medio de tanta mentira, tanto escándalo y tanta tergiversación. Sin embargo, él fue capaz de afrontar este problema con profunda humanidad, valentía y espíritu de justicia, indultando a los últimos presos políticos que quedaban en la cárcel con sentencia ejecutoriada.

Resulta impresionante ver que quienes cuestionan tal determinación son los mismos que han patrocinado la total impunidad tratándose del desaparecimiento o ejecución de más de tres mil personas y son los mismos que crearon sus riquezas o sus movimientos políticos al amparo de la represión, la crueldad y la muerte.

La pregunta que se les puede formular a estas personas resulta incontestable para ellos: ¿por qué sería escándalo indultar a personas que llevan largos años en presidio y, sin embargo, se considera correcto dejar en la total impunidad a quienes jamás tuvieron un día en la cárcel y detuvieron e hicieron desaparecer millares de personas, asesinaron cobardemente a ocho seres humanos en la Operación Albania o cometieron tantos otros crímenes? Este doble estándar jamás podrán justificarlo.

Conviene tener presente que

los indultados recientemente por Patricio Aylwin llevan entre cinco y seis años de presidio y, además, el resto de sus penas ha sido sustituida por extrañamiento, que es una pena particularmente dura. Por otra parte, todos ellos han sufrido otro tipo de

cos de derecha, que se dicen cristianos, prescinden absolutamente de estas terribles crueldades? Por favor, alguna vez afronten integralmente este problema con la verdad y déjense de usufructuar inescrupulosamente del control que tienen sobre casi todos

los hoy indultados por el ex Presidente Aylwin. Por ejemplo, hablemos de Héctor Maturana, que suele ser especialmente citado por los medios de comunicación de la derecha. Cuando Héctor Maturana cometió los hechos tenía apenas 18 años. En su barrio le tocó vivir la tragedia del padre de un amigo que figuraba en la lista de los detenidos desaparecidos y supo del tremendo dolor de esa familia. También supo de torturas tremendas; de operativos armados en las poblaciones donde todos los hombres eran sacados de sus casas a culatazos; de torturas increíbles; de la desgracia de trabajar en el PEM o en el POJH; del pisoteamiento sistemático de sus compañeros y amigos; del vejamen a mujeres en los sectores marginales; de asesinatos reiterados por agentes del Estado; del miedo y la inseguridad permanente.

Fue entonces, cuando este joven, frente a tanta crueldad, tomó una decisión personal: estar dispuesto a sacrificar su propia vida por la libertad y la dignidad de su pueblo. Es cierto, no es mi opción personal, pero moralmente no pueden dejar de considerarse los condicionamientos de crueldad en que actuaron los recientemente indultados. Hoy, estas personas reconocen que vivimos tiempos distintos y que no es época para la lucha armada.

He conocido el mundo de los presos políticos de la dictadura. Tengo la convicción más profun-

da de que ellos sólo actuaron en un contexto de maldades increíbles y de tremendas violaciones a la conciencia ética de la humanidad de derechos humanos. Ellos son hijos de la crueldad de la dictadura. Sus maestros son los agentes del Estado que torturaban, asesinaban y hacían desaparecer personas y son también aquellos intelectuales y políticos que instigaron la represión y que silenciaron los peores crímenes.

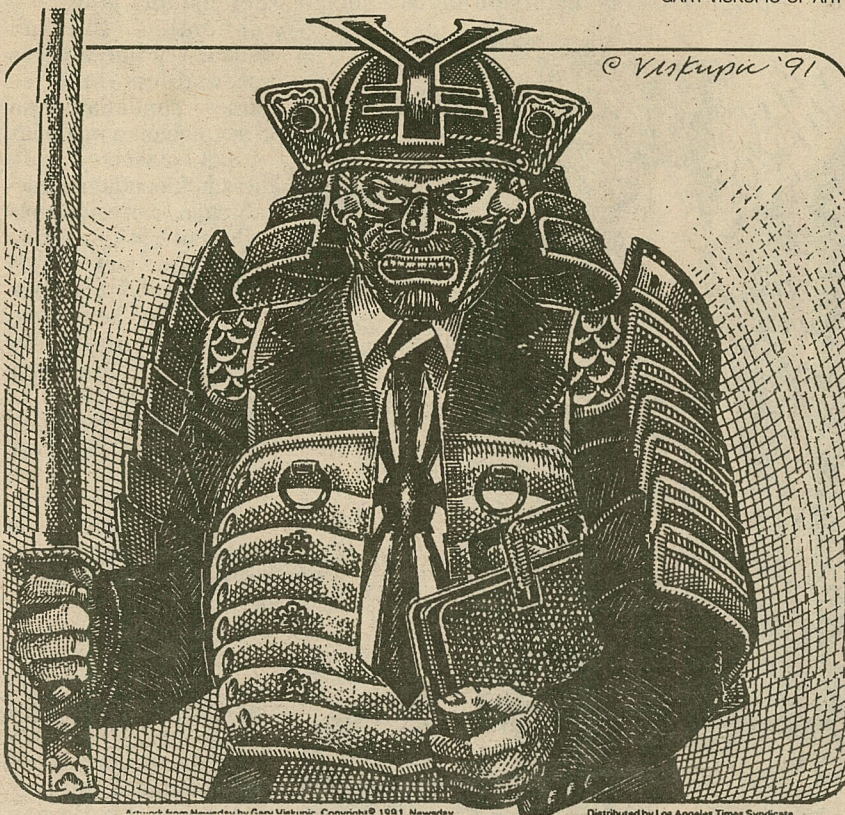
Es muy fácil para algunos políticos de derecha decir hoy que "nada supieron", que "sólo los uniformados hicieron el trabajo sucio. Personalmente soy testigo de la impresionante complicidad moral que existió de vastos sectores en los años de la represión y tengo la convicción más profunda de que en Chile ninguna persona medianamente informada dejó de conocer lo que estaba sucediendo en materia de desaparecimiento de personas y asesinatos políticos.

Recuerdo perfectamente que al conocer el arresto de un centenar de campesinos de Paine, hasta hoy desaparecidos, un distinguido profesional de derecha me dijo: "Sí, esa zona quedó limpiecita" y un alto magistrado me preguntó acerca de "¿qué significado tienen sus recursos de amparo, cuando todas esas personas deben estar muertas?".

Esta es la verdad; la dramática verdad. Y los políticos que hoy alegan ignorancia faltan a la verdad.

Por eso, cuando muchos dirigentes de derecha, que tuvieron grandes responsabilidades morales o silenciaron acomodativamente los más grandes crímenes, y, sin embargo, se han encumbrado al desempeño de altos cargos, yo expreso: ¡gracias Presidente!, porque usted ha sido valiente y justo en medio de tanta hipocresía y tanta mentira.

Andrés Aylwin Azócar es abogado y diputado de la Democracia Cristiana por San Bernardo.



GARY VISKUPIC-OP ART

"penas" prohibidas por la conciencia moral de la humanidad: golpes, aplicación de corriente eléctrica incluso en sus heridas, sumergimiento en el agua de sus cabezas hasta el límite de su resistencia y bajo la presión psicológica de que sus torturadores puedan sobrepasarse. Podemos preguntarnos ¿por qué los políti-

cos de los medios de comunicación.

Agreguemos algo más, ¿por qué se escandalizan del indulto de estos jóvenes y sin embargo, jamás cuestionaron el indulto e impunidad de los asesinos del general Schneider?

Pero existe algo más que decir. Para ello basta considerar las situaciones de crueldad vivi-

Los ritos cívicos de la transmisión del mando han contribuido a acallar la huelga de hambre de un grupo de presos, recién trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad. En los medios de comunicación y en el ámbito político se oyen apenas murmullos de sus protestas de maltratos y tratamientos inhumanos, entre los cuales se menciona el engrillamiento. Existen grupos, encendidos militantes de los derechos humanos en el pasaje reciente, que justifican y casi se enorgullecen de su absoluta sordera antes estos reclamos.

La razón de esta insensibilidad es que estos presos reivindican una legitimidad política. Por esta actitud, considerada sacrilega, son tratados como presos a quienes es necesario despojar no sólo de la libertad sino, además, de sus creencias "irracionales". Frente a ellos los excesos son, por lo menos, comprensibles: aceptar sus derechos se convierte en un escándalo. Son portadores de un doble estigma, el de ser delincuentes y de atreverse a reclamar motivaciones políticas, cuando se vive en un Estado de Derecho.

Ese mecanismo de rechazo puede entenderse. Esta es una sociedad traumatizada por crímenes políticos realizados en nombre de elevados principios. Es comprensible que se quiera romper el círculo vicioso que condujo al terrorismo estatal impune y a sus contrapartes.

Pero la sordera generalizada frente a las

Alta seguridad y derechos humanos

TOMAS MOULIAN

demandas de estos prisioneros es peligrosa. Lo es, en primer lugar, porque pone en evidencia cuán rápido se olvida el principio básico de una ética de los derechos humanos. Todo hombre (aun el enemigo o el delincuente) conserva un núcleo de derechos que no le pueden ser negados en ninguna circunstancia. Si no se tiene cuidado en la aplicación de este principio, aun respecto de presos acusados de delitos especialmente sensibles, se cae fácilmente en una ética inhumana. El preso, aun aquel condenado según el debido proceso, no pierde por eso su humanidad. Tiene derecho a defender una vida de encierro aceptable y a no tolerar condiciones que produzcan su degradación total, su anulación como persona.

Se deteriora de manera crítica la posibilidad de una vida tolerable en la cárcel cuando se niegan las condiciones mínimas para el desarrollo de una relación íntima con los seres cercanos, libremente elegidos. Ese es un principio que se ha estado imponiendo en las legislaciones penales y en los reglamentos carcelarios de las sociedades civilizadas.

Se puede argumentar que las cárceles

de alta seguridad y los sistemas de locutorios existen en otras partes. Pero no es muy inteligente imitar lo peor, sobre todo cuando la tendencia mundial se orienta en la otra dirección. Después de largas experiencias se ha comprendido que esos regímenes de excepción son una carga pesada para las administraciones carcelarias, son ineficientes para la protección de la sociedad y degradantes para los presos.

En el caso chileno, además, van en contra de una larga tradición. Ni siquiera en las cárceles del régimen militar (por supuesto que no estoy hablando de los centros secretos de tortura) se les impuso a los prisioneros el enclaustramiento total que se plantea como forma de vida para los recintos de alta seguridad; esa radical negación de toda sociabilidad o de todo contacto real con los seres queridos.

Si ese sistema de aislamiento se impone desaparecerían las condiciones de una vida de encierro mínimamente tolerable, de una vida que no empuje al preso a preferir la muerte sino lo incentive a la rehabilitación o, por lo menos, a la sobrevivencia. Los presos tienen el derecho de luchar con todas sus fuerzas, usando todos los

medios, contra esa forma de encierro que los conduce a la aniquilación.

Pero lo más grave es que este ensañamiento pasa por alto un hecho central: que en esta sociedad sobreviven factores originantes de la violencia política. Este régimen democrático es quizás el único donde los responsables intelectuales y políticos de desapariciones masivas y de torturas degradantes siguen ocupando altas posiciones en la conducción del Estado. Ello no ocurrió en Grecia o en Argentina, donde fueron juzgados y cumplieron penas, ni en la ex RDA donde algunos responsables fueron juzgados y cumplen penas, ni en España, Uruguay o la mayor parte de los países de Europa del Este donde, si bien no cumplieron penas, por lo menos desaparecieron del escenario político.

De la apreciación anterior no se deriva el principio de la justificación de la venganza ni la aceptación de una impunidad constante. Si se deriva que debemos ser más comprensivos respecto de las causas profundas que generan motivaciones a la violencia política. En gran medida esos presos, con los cuales nuestra sociedad se ensaña, son también víctimas de un pasado que no han podido olvidar, porque sienten que no es totalmente pasado.

Tomás Moulian es sociólogo e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).